EN TORNO A LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION GENERAL DE ORIHUELA

José Vicente Cabezuelo Pliego
Universidad de Alicante

En nuestra Memoria de Licenciatura, dedicada a la *Guerra de los dos Pedros* en las tierras alicantinas (1), ofrecíamos un capítulo al tema que aquí tratamos en donde ya pudimos constatar un hecho que a muchos había escapado: la continuidad del aparato político-administrativo en las tierras valencianas situadas al sur de la villa de Jijona casi desde el mismo momento de su incorporación de derecho a este reino en 1304.

En aquel trabajo señalamos cómo el término **creación**, refiriéndonos a la Gobernación de Orihuela, no había de entenderse como algo original en el sentido de innovación sino que más bien habría de ser visto como una transformación en la estructura político-administrativa anterior, es decir, el paso de la Procuración General del reino de Valencia *ultra Sexonam* a la *Governació dellà Sexona* a través del señorío oriolano del infante don Fernando. Si atendemos a las palabras del profesor Lalinde cuando señala que «*Una institución es precedente de otra si ésta la sucede totalmente en su contenido o se nutre de sus atribuciones en forma tal que el desarrollo de una origina una inferioridad de la otra*» (2) queda perfectamente claro cómo se produce una transformación antes que una creación, en el sentido estricto de la palabra, en eso que Pedro IV instituyó como una Gobernación General independiente a la de Valencia.

Si el origen de la Gobernación General de las tierras de más allá de Jijona se encuentra en la sentencia arbitral de Torrellas y en la Procuración Ge-

neral de Orihuela, el paso de una a otra se debió a la reincorporación al realengo de estas tierras que durante tres décadas habían constituido el feudo orcelitano de don Fernando.

1. LOS ORÍGENES DE LA GOBERNACION GENERAL DE ORIHUELA

Tanto Matheu (3), Bellot (4) como del Estal (5), por citar a algunos autores que aunque cronológicamente alejados han tratado este asunto, señalan que el origen de la Gobernación *dellà Sexona* está en la sentencia arbitral de Torrellas de 1304 y el posterior acuerdo de Elche de 1305, tratados ambos en los que quedaba incorporada de derecho la región septentrional del antiguo reino de Murcia; área ésta que delimitaba por el norte con la antigua frontera del reino de Valencia, es decir, con la frontera que se acordó en el tratado de Almizra años atrás, mientras que por el sur lo hacía con la parte del reino de Murcia que correspondió a Castilla (6).

De esta manera, las tierras incorporadas al reino de Valencia tras Torrellas, quedan adscritas a una Procuración General independiente de la valenciana en un principio más en lo físico que en lo administrativo, pues al parecer, durante los primeros años, el procurador de Orihuela y su comarca no era más que un lugarteniente del procurador general del reino que residía en Valencia (7).

La situación se mantuvo más o menos estable hasta 1329, perpetuándose esa división tanto en lo físico como en lo administrativo en el reino de Valencia *citra* y *ultra Sexonam*. Sin embargo, en ese año, y a pesar de que tanto Jaime II (8) como su hijo y sucesor Alfonso IV (9) habían prometido no enajenar territorio alguno de la real Corona, éste último monarca concedió a su recién nacido hijo, el infante don Fernando, el título de marqués de Tortosa y, entre otras, las villas y lugares de Orihuela, Callosa, Guardamar, Alicante, Monforte y todo el valle de Elda, es decir, Elda, Novelda y Aspe, todo ello en franco y libre alodio (10), quedando su madre, la reina doña Leonor, como tutora y administradora de la donación (11).

De este modo, la totalidad de las tierras situadas al sur de la línea de Jijona, puesto que posteriormente Elche y Crevillente serían concedidos al infante don Juan, segundo hijo del matrimonio entre Alfonso IV y Leonor de Castilla, quedaron segregadas de la Corona convirtiéndose en el señorío del infante don Fernando hasta su muerte en 1363.

2. DINÁMICA DE LA GOBERNACIÓN VALENCIANA HASTA 1363

Desde la formación del señorío oriolano del infante don Fernando hasta el fallecimiento del mismo transcurrieron tres largas décadas, durante las que a excepción de unos pocos años, el reino de Valencia formaba administrativamente una única Procuración General con sede en Valencia y con jurisdicción sobre todo el realengo valenciano. Orihuela y su comarca quedaban fuera de esa Procuración General, aunque el área *ultra Sexonam* contase también con un procurador general, con la salvedad de que éste era nombrado por el infante don Fernando (12), con jurisdicción, como es de imaginar, en todo el ámbito del señorío.

Sin duda, aunque en menor escala, pensamos que ambos procuradores generales, el de Valencia por Alfonso IV primero y por Pedro IV después, como el de Orihuela, poseían idénticas atribuciones, e incluso que el funcionamiento de sus Curias era bastante similar. En una confirmación a la villa de Orihuela de todos sus privilegios, libertades, inmunidades, franquezas, etc., don Fernando señala en 1346 «*Mandantes cum presenti procuratori nostro in hiis que habemus in parte regni Valentie generali seu eius vicesgerenti...*» (13). Es evidente que aquí el sentido de *vicesgerenti*, vicegerente, es el de lugarteniente del procurador general; por consiguiente el funcionamiento de la Procuración de las tierras *dellà Sexona* bajo el dominio del infante don Fernando era similar al de la Gobernación General del reino de Valencia. Hay que señalar, sin embargo, que en esa fecha y desde 1344 el reino de Valencia estaba administrativamente dividido en dos Procuraciones Generales independientes, una que ocuparía más o menos lo que hoy es la provincia de Castellón, con capital en Morella, y otra que iría hasta la línea de Jijona con capital en Valencia (14). Esta división se corrige en 1347 cuando Pedro IV consigue eliminar a su hermano, el infante don Jaime, de la Procuración General de la Corona y logra que su hija primogénita, doña Constanza, fuese jurada como sucesora suya, pues no hemos de olvidar que desde antiguo Procuración General y Primogenitura eran «oficios» parejos y, en teoría, habían de ser ostentados por una misma persona: aquella que había de suceder al rey a su muerte. Y es en ese año de 1347 cuando se vuelve a unificar la Procuración valenciana en la persona de Pedro de Jérica (15).

La Gobernación General de la Corona era, como vemos, trampolín hacia la sucesión de los reinos, razón por la cual Pedro IV apartó de ella al infante don Jaime envenenándolo (16); aunque, presionado por los unionistas aragoneses y valencianos, concedió a su hermanastro don Fernando dicho oficio, declarando además que en caso de no tener hijos varones a él le corres-

pondería el derecho de primogenitura y en caso de tenerlos podría usar de ese título hasta la mayoría de edad del primogénito (17).

A pesar de que únicamente se concedió al infante la Procuración General sobre los estados de tierra firme, el rey revocó el nombramiento de la infanta Constanza, a la que anteriormente había elevado a ese oficio, e hizo lo propio con el nombramiento de Pedro de Jérica, sucediendo a éste en el cargo García de Loriç (18), quien estuvo al frente del mismo más de veinte años.

Una vez derrotadas las Uniones en 1348, el infante don Fernando fue desposeído de todos sus cargos y preeminencias conseguidas con anterioridad, huyendo a Castilla. La Gobernación valenciana, ocupada por un fiel servidor de Pedro IV, García de Loriç, quedó a partir de entonces en íntima dependencia de la figura del rey, de quien sus titulares eran oficiales directos ante la falta de un gobernador general de todos los reinos, ya que aunque a fines de 1350 nació el infante don Juan, futuro gobernador general y posteriormente Juan I, atendiendo a su minoría de edad su padre decidió eliminar a todos aquellos intermediarios que se situaban entre él y sus oficiales (19). Por esta razón, García de Loriç es gobernador del reino de Valencia, no por el infante don Fernando, enemigo ahora de la Corona de Aragón, ni siquiera por el infante primogénito don Juan, dada su minoría de edad; como consecuencia de la inexistencia de un gobernador general para todas las tierras de la Corona lo es por el propio monarca, manteniéndose esta situación hasta 1357.

Sin embargo, a finales de ese año y en pleno conflicto armado con Castilla, don Fernando concordó con su hermanastro Pedro IV la vuelta a la Confederación catalanoaragonesa. Poderosas razones debieron asistir a los hermanos para llegar a una paz que parecía imposible entre ellos pero que finalmente se consiguió (20). Don Fernando, para asegurar su vuelta, obtuvo seguridades sobre su persona y bienes y las de su madre y hermano, y un trato muy de favor que culminó en febrero de 1358 cuando se le concedió de nuevo la Procuración General de la Corona (21), aunque, al igual que la vez anterior y tal y como se señala en el documento de concesión, únicamente con jurisdicción sobre las tierras continentales (22). De esta manera, al poco ya aparecía intitulado en los documentos como «*Inclito infanti Ferdinando, marchioni Dertuse et domino de Albarrazino, fratri nostro carissimo at regnis et terris nostris cismarinis nostro generali procuratori*» (23).

A partir de este momento logró poner bajo su control a todo el reino de Valencia, tanto *citra* como *ultra Sexonam*, de tal forma que mientras que el gobernador del realengo valenciano hasta Jijona se convertía, al menos en teoría, en un delegado suyo (24), aunque Pedro IV se reservó el poder nom-

brar a los gobernadores de los distintos reinos (25), en su señorío de allende Jijona tenía todos los poderes, nombrando, por ejemplo, en 1355, al noble oriolano Ramon de Rocafull como procurador general para todas aquellas tierras, confiriéndole todos los poderes y prerrogativas inherentes al cargo (26). Esta dinámica se mantuvo hasta 1363, fecha de la muerte del infante de Aragón.

Don Fernando estuvo al frente de la Procuración General durante seis años, manteniendo ese título hasta el mismo día de su fallecimiento; cuando, tras amenazar al rey con marcharse de la Corona junto con sus tropas manifestando su descontento por la llegada del conde de Trastámara, fue asesinado por orden regia el 16 de julio (27).

La muerte del infante, además de traer consigo la recuperación de todos sus dominios para la Corona al existir una cláusula especial en el privilegio de concesión que así lo preveía (28), solventaba el delicado asunto de la Procuración General, ya que ese mismo año el primogénito de Pedro IV adquiría la mayoría de edad con lo que el Ceremonioso se hubiese visto en el aprieto de destituir a don Fernando de ese oficio, con el peligro consiguiente dada la voluble trayectoria del infante y la coyuntura bélica del momento (29).

3. LA CREACIÓN DE LA GOBERNACION GENERAL DE ORIHUELA: UN REAJUSTE CRONOLÓGICO

Transcurridos tres años del fratricidio y ya conseguidas para el realengo las tierras que le fueron arrebatadas en 1329, Pedro IV, al tiempo que confirmaba a la villa de Orihuela un privilegio que dos años antes le concedía en Sagunto prometiendo no volver a segregarla de la Corona, confería a toda el área *dellà Sexona* jurisdicción propia, elevándola al rango de Gobernación General independiente de la del reino de Valencia y de la frustrada del reino de Murcia, en el caso de haberse cumplido los pactos habidos entre el rey de Aragón y Enrique II de Castilla, entonces conde de Trastámara (30). Esto sucedía el 10 de septiembre de 1366. De este modo, esas tierras que en 1304 pasaron a formar parte del reino de Valencia con la denominación de *ultra Sexonam* y que posteriormente le fueron conferidas al infante don Fernando en régimen de señorío, se convirtieron en 1366 en Gobernación General, desvinculada administrativamente e independiente en su gobierno de la del reino de Valencia, aunque idéntica a ella en cuanto a funcionamiento y prerrogativas.

Pero ¿qué sucedió en lo que refiere a la administración de estas tierras durante el periodo que discurre entre julio de 1363 y septiembre de 1366?. Dicho de otro modo, antes de la independencia de derecho, ¿las tierras de Orihuela la gozaron de hecho o quedaron incorporadas durante esos tres años a la Gobernación General valenciana?. Nuestro objetivo en el presente trabajo no es otro que el de analizar esta cuestión.

Cuando se inició la conflagración bélica entre Castilla y la Corona de Aragón conocida como *Guerra de los dos Pedros* la territorialidad del reino de Valencia aparecía sesgada, ya que el sur de la misma, el área que aquí tratamos, se encontraba en manos de los castellanos por cesión voluntaria del infante don Fernando, su señor (31). Una ofensiva aragonesa logró recuperar a finales de 1356 la villa de Alicante, villa ésta que quedó incorporada al señorío de Pedro IV y a la jurisdicción del gobernador general del reino de Valencia, de quien sabemos que allí tenía un lugarteniente (32). Sin embargo, cuando don Fernando regresó a la Corona de Aragón exigió que se le devolviese esa plaza, accediendo Pedro IV a la petición del infante (33).

Desde aquel mismo momento, la situación volvería a los cauces anteriores a la guerra en lo que a la administración de los territorios se refiere: un gobernador general vinculado al monarca con jurisdicción sobre todo el realengo valenciano hasta la línea de Jijona más los territorios de Elche y Crevillente, concedidos al infante don Martín, segundogénito de Pedro IV, tras la muerte de don Juan de Aragón, de los que el rey se convirtió en administrador (34). Mientras, el resto del territorio *ultra Sexonam*, propiedad de don Fernando, volvió a ser regido por un procurador general nombrado directamente por el infante que mantenía una independencia con respecto al de Valencia.

El distinto rango y naturaleza de ambos oficiales hacía que el oficial regio pudiese actuar dentro de la jurisdicción señorial en aquellas causas que eran competencia directa de su Curia. De este modo, a consecuencia de la situación anómala existente en todo el territorio valenciano debido a la guerra, García de Lorig, como gobernador general del reino, entre 1358 y 1363 actuó indistintamente al norte y al sur de la línea de Jijona en defensa de la integridad del mismo. No duda García de Lorig, a requerimiento de Pedro IV, en defender a los oriolanos de las presiones monetarias a que se veían sometidos por parte de los diputados generales del reino de Valencia (35), ni en fortificar los castillos del área orcelitana y vigilar sus fronteras con el reino de Murcia (36).

Sin embargo, e igualmente durante ese periodo de tiempo, fueron consideradas como ilegales otras actuaciones del gobernador general en estas tie-

rras. En febrero de 1361 Pedro IV hubo de sobreseer un asunto que le fue presentado por el propio infante don Fernando sobre cómo el justicia de Alicante se negó a obedecer un dictamen de García de Lorig, a pesar de contar con el respaldo jurídico de un doctor en leyes de la categoría de Arnau Joan, argumentando que ni él ni la villa de Alicante pertenecían a la jurisdicción de la Gobernación valenciana (37). Parece claro que esas funciones hasta la muerte de don Fernando correspondieron a los procuradores generales que para ese territorio eran nombrados por él.

Muerto el infante sin hijos varones, Pedro IV quiso recuperar para la Corona todos sus dominios, y así, atendiendo a la cláusula antes citada, revocó su testamento (38). Un mes y pocos días habían transcurrido desde el fatal acontecimiento cuando el rey mediante dos cartas citó en la Corte a los alcaides, síndicos y procuradores de todo el territorio *dellà Sexona* con la segura intención de ser jurado como su nuevo señor, del mismo modo que ya hiciese en Tortosa (39). Sin embargo, la villa de Orihuela se negó a jurarlo hasta ver si la infanta doña María, viuda de don Fernando, quedaba o no embarazada (40). Un año hubo de esperar el soberano aragonés para ver reconocido su derecho, durante el cual al procurador *dellà Sexona*, a pesar de que colabora en la defensa de aquella frontera con el gobernador general del reino (41) y de que Pedro IV lo llame «*feel nostre*» (42), al no haber jurado Orihuela al rey como señor, no podemos presentarlo como oficial regio, sino que seguiría siendo el procurador señorial de los dominios oriolanos de doña María.

Pasados diez meses y a la vista de que la infanta no daba a luz, a mediados de mayo de 1364 se dirigió Pedro IV al *Consell* de Orihuela para agradecerle la defensa de la villa e instarle a que, transcurrido el plazo lógico de embarazo, le enviasen embajadores con la misión exclusiva de jurarle como señor natural (43). El 10 de julio se presentaron en Sagunto, plaza que en aquellos momentos sitiaba el monarca aragonés, cuatro nuncios oriolanos que en nombre de esa población le hicieron al rey el juramento de fidelidad y homenaje correspondiente (44), fecha que aprovechó el Ceremonioso para incorporar *ad perpetuum* la villa de Orihuela a la real Corona (45).

El paso de Orihuela al realengo a mediados de 1364 supuso que toda el área *ultra Sexonam*, a pesar de que en aquellos momentos se encontraba en poder de Castilla (46), volviese a integrarse en el realengo aragonés. El juramento de fidelidad prestado por los mensajeros orcelitanos a Pedro IV debió de producir, en el mismo instante en que se hacía, la transformación del señorío de don Fernando en tierra de la Corona, afectando el cambio del mismo modo a la oficialidad que lo regía. Por esta razón pensamos que no hubieron de producirse confirmaciones en los cargos. Es por ello que Joan Mar-

tínez d'Eslava, aun habiendo sido nombrado por el infante don Fernando, continuó ostentando el cargo de procurador general de las tierras de más allá de Jijona hasta su muerte, producida en junio de 1365.

Su sucesor, Nicolau de Próxida, fue nombrado procurador un año después, el 19 de mayo de 1366 (47), esta vez por Pedro IV, suponemos que bajo las mismas condiciones pues no contamos con el nombramiento del primero. Pero si examinamos el nombramiento de Nicolás de Próxida y lo comparamos con el que realizara don Fernando en 1355 sobre la persona de Ramon de Rocafull observamos que, de señorío o de realengo, el procurador *dellà Sexona*:

- recibe idéntica intitulación
- la jurisdicción territorial es la misma
- el ejercicio del oficio es el mismo
- su salario, derechos y deberes son los mismos en ambos casos.

Es evidente, en definitiva, que estamos hablando de una misma forma de gobierno para un área que, conocida físicamente desde 1304, aunque ha oscilado jurisdiccionalmente entre el realengo y el señorío, ha mantenido la misma estructura administrativa a lo largo del tiempo.

Por todo ello, cuando Pedro IV el 10 de septiembre de 1366 concede a las tierras *dellà Sexona* el poder regirse de modo independiente de como se hacía en el resto del territorio valenciano, si bien introducía de manera oficial en estas tierras el régimen de la Gobernación General que años atrás había triunfado en toda la Corona de Aragón (48), en modo alguno las estaba dotando de una forma de gobierno nueva. El hecho de mantener al antiguo procurador, Nicolau de Próxida, y concederle ahora el título de gobernador pero sin cambiar un ápice en lo que a sus atribuciones se refiere, no parece que indique ruptura con el modelo anterior. Más aún, cuando Pedro IV el 22 de febrero de 1369 se dirige al ya gobernador de Orihuela para que actúe de juez en un pleito, en una mención que hace de Joan Martínez d'Eslava, procurador que fue de aquellas tierras en tiempos del infante don Fernando y posteriormente suyo propio, lo denomina como de predecesor suyo en aquel oficio (49). E incluso sabemos que unos meses antes de la creación de la Gobernación, en junio de 1366, Pedro IV ya utiliza el término gobernador para intitular al dicho Nicolau de Próxida (50).

Sin duda alguna ello nos hace pensar en una clara continuidad administrativa imposible de romper únicamente por un cambio de denominación. Pensamos que estas tierras se incorporaron a la Gobernación General el mismo día que lo hicieron a la Corona, no el día de la muerte del infante don Fernan-

do, sino un año después, el 10 de julio de 1364. De este modo, atendiendo a que en estos momentos de la historia el hecho en sí es siempre anterior al derecho sancionador (51), el privilegio de creación de septiembre de 1366 no sería más que la anuencia *de iure* de ese modelo de gobierno que *de facto* se venía produciendo desde unos años atrás.

Finalmente, señalar que no nos deben confundir las intitulaciones ni en la denominación del oficial ni en la del área en la que está adscrito. El privilegio antes citado por el que Pedro IV dotaba a las tierras de más allá de Jijona de una Gobernación propia produjo, desde el mismo día de su promulgación, un cambio en la intitulación del oficial sobre quien recaía la tarea del gobierno de ese territorio, y de *procurator* pasó a denominarse *gubernator*. Esta permuta intitulativa de un día para otro debió de causar cierta confusión entre los miembros de la Cancillería real, pues tenemos constancia de que, al menos durante los primeros años de vida de la Gobernación *dellà Sexona*, los documentos alternan ambas formas.

En lo que al área se refiere, a pesar de no existir tampoco una fijación nominativa de la misma, pues tan pronto se utiliza el clásico *regni Valencie ultra Sexonam* (52) como los restrictivos *Oriole* (53) o *villarum Oriole et Alicantis* (54), o incluso el antiguo *partibus Murcie* (55), todas ellas hacen referencia a aquel territorio que, como consecuencia de la sentencia arbitral de Torrellas, quedó incorporado al reino de Valencia.

4. EL *PORTANTVEUS DE GOVERNADOR DELLÀ SEXONA*: SU ACTUACION DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE EXISTENCIA DE LA GOBERNACION DE ORIHUELA (septiembre 1366-1370)

Contemporáneos a la Gobernación General medieval y moderna no dudan en apuntar que este oficio únicamente se encuentra por debajo del dictamen regio (56), siendo consiguientemente la segunda fuerza jurídica del reino, aunque en el caso de la Gobernación *dellà Sexona* lo sea del área regnícola a la que está adscrita.

Fue Nicolau de Próxida el primer gobernador general de esta región, cuyo septentrión, como ya hemos visto, estaba en la villa de Jijona y no en el Júcar, como erróneamente aparece en una misiva que Pedro IV le dirige en octubre de 1368 (57), y su límite sur en la frontera con el reino de Murcia castellano. Atendiendo a este hecho, todos los asuntos que se producen en el ámbito orcelitano y que conciernen a la Curia del gobernador son competencia directa de éste, considerándose ilegal cualquier actuación que, sin un man-

dato especial, pueda ejercer el gobernador valenciano en estas tierras. En septiembre de 1367, por ejemplo, Pedro IV ordenó a García de Loriç, *portantveus* del reino de Valencia, llevar a cabo una actuación en el valle de Elda, actuación que hubo de encomendar meses después a Joan Polo, veguer de la Curia del gobernador, ya que, como se indica en el documento, al haber separado ambas Gobernaciones y pertenecer el valle de Elda a la de Orihuela, el cumplimiento de la orden no podía llevarlo a cabo García de Loriç (58). Años más tarde, el Ceremonioso hubo de corregir también una actuación del mismo gobernador revocando una prohibición que dictó dicho García de Loriç contra la villa de Alicante sobre la exportación de armas, atendiendo a que era otro el oficial que regía aquella villa (59).

Sin embargo, en otras ocasiones, ya por descuido ya con toda la intencionalidad, algunos de los asuntos que normalmente son conocidos por el titular de la Gobernación, como la puesta en posesión de heredades o donaciones regias (60) o la solución en justicia de pleitos de devolución de bienes (61) dentro de su jurisdicción, son tratados por otros oficiales. Estas actuaciones, a pesar de su carácter delegado y de llevar las *vices nostras* regia, suponen una cierta intromisión en el gobierno de las tierras *ultra Sexonam*.

Una de las grandes lagunas que la investigación histórica ha de colmar es el conocimiento de las causas cuyo entendimiento compete a la Curia del gobernador general del territorio como *gerensvices* del de la Corona, el primogénito. En este campo, obras contemporáneas a la gestación y maduración del propio sistema gubernativo son las que han marcado y marcan la pauta de cualquier estudio (62). Sin embargo, el excesivo teoricismo de todas y de cada una de ellas provocan una serie de contradicciones entre lo que propugnan como competencias exclusivas del gobernador y aquellas que se dan en la práctica. Nuestra intención en el presente trabajo no es la de resolver este enigma, sino únicamente la de establecer cuales son las causas más comunes de actuación de la Curia de la Gobernación desde el momento de su creación de derecho en el verano de 1366 hasta 1370.

Como ya sabemos Nicolau de Próxida fue el último procurador y también el primer gobernador general que tuvieron las tierras allende Jijona. Atendiendo a su nombramiento, fechado el 19 de mayo de 1366, obtuvo, como ya era costumbre, la alcaldía del castillo de Orihuela según la costumbre de España (63) y la Procuración/Gobernación General (64), si bien en este documento nada se dice en lo referente a la manera de gobernar, señalando tan sólo que había de hacerse tal y como era costumbre y por otros procuradores había sido hecho. Pero, dentro de ese retrotraerse en el tiempo, con-

creta que dichos oficios habían de ser ejercidos del mismo modo que en tiempos de su padre, Alfonso IV.

Examinada la documentación referente a los nombramientos de Guillem de Cervelló (65) y Jofre Gilabert de Cruilles (66), los dos últimos procuradores nombrados por Alfonso IV para las tierras *dellà Sexona* antes de que éstas fuesen donadas en franco y libre alodio al infante don Fernando, observamos que a éstos, además de ser nombrados *de nostro processerit beneplacito voluntatis* y de ocupar el oficio por el infante don Pedro, después Pedro IV, de quien eran vicegerentes, se les concedía un salario de cuatro mil sueldos valencianos anuales, tanto en tiempo de paz como de guerra (67). Pero lo que es más interesante para nosotros es el cómo, además de las prerrogativas inherentes al cargo, Alfonso IV les faculta para que puedan conocer y dictar sentencia sobre las segundas apelaciones en caso de que él y el infante primogénito, como procurador general de la Corona, se hallasen ausentes del reino de Valencia (68).

De todas maneras, el oficio del que se hizo cargo Nicolau de Próxida contaba con jurisdicción ordinaria, tal y como se lo hace saber el propio Pedro IV para que solucionase un pleito existente entre los hombres de Guardamar y el *Consell* de la villa de Orihuela (69) en marzo de 1370. Matheu señala que además cuenta con la jurisdicción civil y criminal con el mero y mixto imperio (70), lo que posiblemente le dé un amplio espectro de posibilidades en lo que refiere a sus actuaciones (71).

Estos amplios poderes, lejos de definir la figura política del gobernador, vulneraban en ocasiones los derechos de actuación de otros oficiales ordinarios de inferior *status*. A pesar de que el *portantveus* no debía entrometerse en las causas pertenecientes a jueces y oficiales ordinarios sino únicamente en *fadiga de dret* (72), ni tampoco en la elección de los cargos municipales de ninguna villa, universidad o lugar de realengo (73), tal y como Pedro IV estableció en las Cortes de Monzón de 1363, parece que la intromisión en este campo estaba a la orden del día, provocando graves pleitos entre gobernador y *Consell* municipal.

Uno de estos litigios estalló en Orihuela en el verano de 1370. Al parecer, el baile general y el *Consell* de esa villa se querellaron ante el rey contra el gobernador, haciendo a su vez éste lo propio contra dicho *Consell*. Por esta razón, y ante lo delicado del asunto, Pedro IV comisionó a Ramon Tolsa, un licenciado en leyes, para que de la manera más secreta y objetiva posible abriese una investigación cuyo resultado había de serle remitido a la Corte. Lo espinoso del tema hizo que el rey concediese las *vices nostras* al comisio-

nado, quien tenía orden de ir personalmente a Orihuela aunque, y en aras a su pronta aclaración, le facultaba para viajar por todo el reino siempre que fuese con motivo de la misión que le había sido encomendada. Lo crítico del problema llevó a Pedro IV a nombrarle un sustituto por si el dicho Ramon Tolsa no pudiese ejecutar el mandato (74). Esto sucedía el 26 de julio. Igualmente ese mismo día encomendó al comisionado que, como la queja del *Consell* oriolano había sido por intromisión del gobernador en causas que pertenecen a jueces ordinarios, investigase acerca de cuales son los casos en los que el gobernador, en razón de su oficio, puede entrometerse (75).

Con todo, no dudó el Ceremonioso en amonestar al *portantveus* señalándole que, según fueros y privilegios de esa villa, no debía inmiscuirse en los pleitos, cuestiones o asuntos que perteneciesen conocer a los oficiales ordinarios de la localidad, sino cuando éstos actuasen injustamente en sentencia definitiva contra algún ciudadano. Además, le recomendó que para el bien de la *cosa pública* cada oficial había de encargarse de una función, no debiendo estorbarse en el ejercicio de las mismas (76).

El proceso se mantuvo abierto todo el verano y, en su conocimiento, Pedro IV entendió que parte de culpa la tenía el *Consell* al hacer causa común con ciertos ciudadanos que, por notificación hecha al rey por parte del propio Nicolau de Próxida, le injuriaron de palabra y de obra durante el ejercicio de su oficio. Es por ello que el 28 de septiembre se dirige al *Consell* de Orihuela para señalarle que el gobernador nada tenía contra él, sino contra ciertas personas individuales, motivo por el cual, y para evitar un posible escándalo y discordia entre ambos poderes, el municipal y el real, le ordena que no vuelva a hacer causa común con intereses privados ni vuelva a ir contra el gobernador, ya que ello *torna e poria tornar evidentment en dapnatge de la nostra cosa publica de la dita vila* (77).

De todos modos, y a pesar de esas cartas al gobernador y al *Consell* con órdenes tajantes para que volviesen a una *entente cordiale*, Pedro el Ceremonioso no cerró el pleito. Mantuvo a Ramon Tolsa al frente del mismo, ordenándole ese día 28 que, aunque él ya había mandado llamar al baile general de aquella partida para que le informase directamente sobre las querellas respectivas, mantuviéase abierta la investigación (78), llamándole meses más tarde a la Corte para que le mostrase los resultados de la misma, méritos-deméritos de cada una de las partes (79), cuya sentencia definitiva estaba reservada a su conocimiento o al del primogénito en caso de que él no estuviese presente en el reino de Valencia.

Vemos pues que, tanto por apelación como en *fadiga de dret*, el gobernador general puede entender de causas que en principio pertenecen a los ordinarios municipales. Pero ¿qué otras causas son de su competencia?.

Tras la *Guerra de los dos Pedros* el área meridional del reino de Valencia, aquella que estando en frontera con el reino de Murcia sufrió de manera más grave los avatares del conflicto, aparecía como un espacio con una escasa esperanza de vida. Todas y cada una de las poblaciones de la Gobernación de Orihuela habían sido destruidas en mayor o menor medida, los campos y la infraestructura agraria habían sufrido el mismo fenómeno, todo ello con el agravante de una despoblación causada por la emigración, el rapto o la muerte.

A la vista de la crítica situación, no reparó Pedro IV, a través de un sin fin de medidas reactivadoras en forma de concesiones, privilegios, exenciones fiscales e incluso religiosas en el caso de los mudéjares, etc., en favorecer a estas tierras recién devueltas al realengo e intentar paliar las deficiencias existentes. Es un claro intento de devolver a la región el aspecto que tenía antes de la guerra. Sin embargo, aunque este proyecto de reconstrucción nacional parte de la actitud benefactora de la Corona, su puesta en práctica se debe a la actuación del gobernador general, quien, en ausencia del rey y de su primogénito, es el oficial a cuyo cargo está la *rectio* y la *gubernatio* del territorio al que queda adscrito. Bajo la atenta mirada de Pedro IV y siguiendo sus directrices, Nicolau de Próxida, como gobernador general del territorio valenciano allende Jijona, se ocupó durante los primeros años de paz que siguieron a la guerra con Castilla de administrar y defender el área a él encomendada, intentando no inmiscuirse en las parcelas de poder que correspondían al baile general o a los ordinarios inferiores.

He aquí una enumeración de las causas más comunmente solventadas por la Curia del gobernador durante sus primeros años de actuación.

Conocer, juzgar y sentenciar causas pertenecientes a su jurisdicción

Normalmente, antes de incoar un proceso, el *portantveus de governador* abría una investigación para conocer todo lo relativo al caso. Las investigaciones más corrientes refieren a:

- engaños (80)
- fraudes (81) y abusos de poder por parte de oficiales (82)
- crímenes, traiciones o infamias contra la Corona (83)
- supuestas injusticias cometidas por tribunales inferiores (84)

y, en general, todos aquellos pleitos que no pertenecen a las Curias inferiores o que el rey delega en él.

En la mayoría de los casos, aunque se llame a las partes a prestar declaración, los sumarios que se abren lo hacen bajo la fórmula *breviter et de plano*, intentando de esta manera no alargar los procesos en demasía, siendo las penas impuestas *segons fur e rao*. Sin embargo, algunas de estas investigaciones no terminan en la Curia del gobernador. En ocasiones Pedro IV se preocupa por asuntos de especial relevancia para él cuya trama o personajes son de esta Gobernación. En estos casos, Nicolau de Próxida únicamente se ocupa de realizar las indagaciones pertinentes, cuyos resultados habrá de enviar a la Corte para que el rey dicte. Suelen ser éstos asuntos acerca de traición de oficiales (85), y si bien no son juzgados por el gobernador, la importancia del mismo queda reflejada en el hecho de que es él quien lleva a cabo la investigación, quedando el dictamen regio en dependencia directa de lo que en ésta le exponga.

Requerimientos fiscales a oficiales *extra regnum*

La situación de frontera de la Gobernación de Orihuela con respecto al reino de Murcia castellano hizo que en más de una ocasión, dada la movilidad poblacional habida de ambas partes y a pesar de la hermandad existente entre la villa de Orihuela y la ciudad de Murcia (86), por diversos motivos, los oficiales y habitantes de una parte agraviasen a los pobladores de la otra.

A pesar de que no tenemos constancia documental de que el gobernador, oficiales o habitantes de Orihuela y su comarca actuasen injustamente en periodo de paz contra algún ciudadano murciano o castellano, sí tenemos bastantes referencias de abusos en contrario. Normalmente los agravios eran realizados contra los bienes muebles e inmuebles que habitantes de esta parte del reino de Valencia tenían en el reino de Murcia (87) o contra mercaderes valencianos, a quienes en diversas ocasiones oficiales con la entidad del Adelantado castellano de ese reino secuestraron todas sus mercaderías a su paso por Murcia y su región (88). E incluso se llegó al punto, en algún momento, de producirse latrocinios por parte de murcianos dentro de los términos de la Gobernación de Orihuela (89).

Cuando estos hechos eran conocidos, el gobernador general, por mandato regio, es quien se encargaba de abrir las investigaciones correspondientes, pudiendo citar mediante cartas requisitorias a dichos oficiales o ciudadanos a su Curia para hacerles responder de los daños realizados (90). En caso

de que éstos no se presentasen, normalmente el *portantveus* debía tomar el valor equivalente a lo sustraído de los bienes que los castellanos tenían dentro de su jurisdicción.

Viudas, pobres y huérfanos

Las causas de viudas, huérfanos y miserables, tal y como nos lo señalan entre otros Belluga (91) y Tarazona (92), eran tratadas en la Curia del gobernador, sin duda alguna por el interés en intentar proteger desde el estamento oficial a estas personas a causa de su desgracia social. En las súplicas al rey no dudan los miembros de este colectivo en señalarle el estado civil y económico en que se encuentran, a sabiendas de que éste siempre actuará a su favor.

En los casos de manifiesta pobreza o cuando individuos de esta condición pleitean en los tribunales con otros de superior condición económica, es el gobernador quien debe defender sus intereses. De esta manera, en agosto de 1368 y a súplica de Bernat de Tena, a quien correspondía, junto a sus hermanos, ciertos bienes existentes en la villa de Alicante por herencia de su padre, herencia que no podían cobrar por entrar en conflicto con personas poderosas siendo ellos pobres, ordena el rey Ceremonioso a Nicolau de Próxima que defienda al suplicante en las causas que éste mueva (93).

Cuando se unían dos de estas desgracias, viudedad y pobreza por ejemplo, el asunto todavía es más claro. A causa de la antes señalada situación de frontera de la Gobernación de Orihuela y de la catastrófica influencia de la contienda con Castilla en el plano demográfico muchas mujeres hubieron de quedar viudas, lo que en la mayoría de los casos significaba, si no se contaba con un importante patrimonio, el engrosar las filas de los individuos calificados técnicamente con el adjetivo de *miserables*. Este colectivo se vio favorecido por la justicia regia cuando se recurría a ella e incluso cuando no se hacía de modo directo. Es así que en septiembre de 1366, ante la súplica de Castellona, viuda de Pere Galindo, vecino de Guardamar, a quien Pedro I de Castilla había arrebatado sus bienes y todavía no había conseguido recuperar, Pedro IV ordena a Nicolau de Próxima que, cómo es persona desvalida y no tiene otro sustento, le haga justicia y, si es posible, conozca y provea a otras mujeres que estén en la misma situación (94). Observándose este hecho en bastantes ocasiones.

Parece obvio, pues, que la defensa del menos favorecido corresponde a la justicia del *portantveus* y tiene un condicionante claramente económico.

El gobernador general tiene muy en cuenta este móvil a la hora de hacer justicia, de tal modo que es muy corriente que el rey le recomiende que ha de hacerla *per tal manera que'l dit suppliant, qui es persona pobra e miserable, per aquesta rao no hage altra vegada davant nos a tornar* (95) en recurso de apelación, con el consiguiente perjuicio en la renta si se tratase, como era habitual en aquellos momentos, de recuperar bienes secuestrados durante la contienda a viudas (96), pobres (97) y huérfanos (98).

Defensa de sus oficiales y vasallos

El gobernador también se ha de encargar de la defensa de los vasallos y oficiales reales dentro de su jurisdicción

- dándoles posesión de lo donado a ellos por el rey (99)
- asegurándolos en esa posesión y evitando que sufran daño alguno (100)
- defendiendo a los oficiales en sus actuaciones por orden regia (101)
- devolviéndoles bienes tomados injustamente (102)
- revocando ventas realizadas con presión sobre el vendedor (103), etc.

Quedaba él encargado, como brazo armado de la ley, de que todo eso se llevase a término, incurriendo en sentido contrario en la ira regia y en el pago de una multa en dinero (104), cuyo valor es oscilante, o en bienes (105), con los que normalmente se habrá de pagar el agravio, o incluso en la pérdida del oficio (106).

Defensa de su jurisdicción

La defensa de la jurisdicción orcelitana a la que está adscrito se centra fundamentalmente en dos aspectos, la defensa de la *cosa pública* y la defensa militar de la Gobernación.

a) La defensa de la «cosa pública»

En este aspecto, el gobernador se presenta como garante de todo aquello que significa una mejora en las condiciones de vida del área que gobierna y por consiguiente de las regalías de la Corona. En sentido contrario, su misión es evitar daños o el deterioro de la *cosa pública*, de ahí que se preocupe por no gravar económicamente a los comerciantes que se mueven dentro de la Gobernación debido a la carestía que sufría la villa de Orihuela (107). Tam-

bién lo encontramos actuando como comisario encargado de la construcción de un azud y de una acequia que mejorarían el riego de la huerta de Alicante (108). E incluso aplicando la fuerza y la justicia en los casos de bandosidades ciudadanas, como sucediese en 1370 en Alicante entre los Togores y los Vallebrera quienes, con sus correspondientes validores, estaban ocasionando graves daños y escándalos a los vecinos de esa villa (109).

b) La defensa militar del territorio

Al igual que en lo civil, el gobernador general es la máxima autoridad militar de la Gobernación. Este hecho en el caso del reino de Valencia de más allá de Jijona es doblemente cierto al ser sus *portantveus* a la vez alcaides del castillo de Orihuela, lo que nos refleja a las claras el carácter de *marca* que tiene esta Gobernación por su situación de frontera. Por estas razones, son indiscutibles las prerrogativas militares de que goza Nicolau de Próxida, permitiéndole en algunos casos el tomar castillos en nombre del rey y encomendarlos a quien él tuviese a bien, como sucediese con el de Callosa de Segura en septiembre de 1368 (110).

En este sentido, hemos de señalar que la fuerza militar del gobernador provenía, amén de las prerrogativas, de los hombres que tenía bajo su mando, con los cuales podía hacer respetar la ley. En una carta dirigida a los diputados del reino de Valencia en mayo de 1367, Pedro IV les señala cómo el gobernador de Orihuela contaba con una fuerza en ese castillo que era conveniente que fuese mantenida, ya que con ella podía salir contra los enemigos *en lo temps de la necessitat* y defender a la villa y su término especialmente en la época de recolección del cereal, evitando así la destrucción de las cosechas (111). Esa fuerza, a juicio de la Dra. Ferrer i Mallol, sería de alrededor de cuarenta y cinco soldados, cifra que estaría en consonancia con los seis mil sueldos que percibía el gobernador como retinencia de la plaza (112).

Por todo ello, su misión es la vigilar las actitudes ambiguas de los señores que residen en su circunscripción, caso de García Jofré de Loaysa, señor de Petrer, de quien se rumoreaba, aun después de finalizada la guerra con Castilla, que se iba a aliar con los hombres de Villena en contra de Pedro IV (113); proteger las costas de la piratería (114); asimismo asegurar los castillos de su jurisdicción reforzando o derruyendo las defensas según fuese necesario (115) o enviar tropas en auxilio o protección de una plaza para mayor seguridad de toda la Gobernación (116).

CONCLUSIÓN

Señalar, a modo de conclusión, que si bien es en 1366 cuando Pedro IV erige en independientes de las del reino de Valencia las tierras allende Jijona y las constituye en Gobernación General, éstas, pensamos, desde el mismo momento de su reincorporación a la Corona a mediados de 1364 comenzaron a funcionar en ese régimen. Fueron sus titulares meros oficiales al servicio del señor, rey o infante, a cuyo cargo estaba la dirección y defensa de este territorio. Cuentan, como vemos, con prerrogativas civiles, que les permiten juzgar y dictar sentencias, y militares, siendo a un tiempo tanto los procuradores de don Fernando como Nicolau de Próxida, gobernadores de toda el área y alcaides del castillo de Orihuela, recibiendo por ambos oficios un salario de unos diez mil sueldos.

NOTAS

- (1) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *Documentación alicantina en el Archivo de la Corona de Aragón durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso. 1355-1370*, Tesis de Licenciatura inédita, Alicante, 1989.
- (2) LALINDE ABADIA, J. *La Gobernación General en la Corona de Aragón*, Zaragoza, 1963, p. 14.
- (3) MATHEU SANZ, L. *Tractatus de regimine urbis et regni Valencie*, Valencia, 1655, tomo I, cap. II, sent. III, p. 138.
- (4) BELLOT, P. *Anales de Orihuela* (ss. XIV-XVI), Orihuela, 1956, tomo II, p. 85.
- (5) ESTAL, J. M. del. *El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental I/1*, Alicante, 1985, p. 99.
- (6) *Ibidem*.
- (7) ESTAL, J. M. del. *op. cit.* pp. 99-103.
- (8) ZURITA, J. *Anales de la Corona de Aragón*, Zaragoza 1972, tomo III, libro VII, cap. IV, p. 315.
- (9) *Ibidem*, p. 316.
- (10) ABAD NAVARRO, E. El castillo de La Mola de la ciudad de Novelda. Trabajo histórico y arqueológico, Alicante, 1984, doc. 16.
- (11) *Ibidem*, doc. 17.
- (12) BELLOT, P. *op. cit.*
- (13) A.H.N, Ms. 1368 b: *Privilegia per Serenissimos Reges ciuitati Oriole concessa*, ff. 96r-97r (octubre, 18).
- (14) ACA, C, reg. 953, f. 103v (noviembre, 1) y ACA, C, reg. 953, ff. 104v-105r (noviembre, 1).
- (15) ACA, C, reg. 959, ff. 19v-20r (marzo, 21).
- (16) ZURITA, J. *op. cit.* Zaragoza, 1973, tomo IV, libro VIII, cap. XVIII, p. 90.
- (17) *Ibidem*, libro VIII, cap. XXVII, pp. 129-130.
- (18) ACA, C, reg. 959, ff. 62r-v (1348, marzo, 1).
- (19) LALINDE ABADIA, J. *op. cit.* p. 149.
- (20) Sin duda, el más beneficiado era Pedro IV, puesto que con la vuelta a la Corona de Aragón del infante don Fernando recuperaba los territorios de más allá de Jijona que hasta aquel momento habían sido plataforma de los castellanos contra él dentro del reino de Valencia. CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* pp. 66-67.
- (21) ACA, C, reg. 966, ff. 72r-v.
- (22) «... in regnis et terris Aragonum, Valencie ac comitatibus Barchinone, Rossilionis et Ceritanie constitutis ...» *Ibidem*.
- (23) ACA, C, reg. 1381, ff. 118r-v (1358, mayo, 12).
- (24) « dilecto consiliario nostro Garsie de Lorig, militi, gerentivices in regno Valencie pro inclito infante Ferdinando ... generale gubernatore nostro in regnis, comitatibus atque terris cismarinis ...». ACA, C, reg. 705, f. 61r (1361, febrero, 4).
- (25) «Retinentes tamen nobis quod dicto infans habeat et debeat ponere in officiis supradictis quod nos duxerimos nominandos». *Vid.* nota 21.

- (26) ESTAL, J. M. del. *Colección documental del medievo alicantino. Tomo II. Años 1306-1380*, Alicante 1988, doc. 142.
- (27) ZURITA, J. *op. cit.* libro IX, cap. XLVII, pp. 468-475.
- (28) Al morir sin descendencia. ABAD NAVARRO, E. *op. cit.* doc. 16.
- (29) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* pp. 109-110.
- (30) «Intendimus tamen et huius nostri privilegii tenore etiam declaramus quod dicta villa Oriole nunquam subici valeat iurisdiccioni gubernatoris civitatis Valencie seu regni Murcie si casus evenierit, prout debet fieri et nobis per regem Enricum promissum solemniter extitit quod nostre Corone regie devolvatur, sed dictam villam cum suo generali procuratore et aliis nostris officialibus sicut nunc gubernatur et regitur sic eam ammodo et cunctis ac perpetuis temporibus gubernari et regi volumus et iubemus». ACA, C, reg. 910, ff. 102v-105r. *Vid.* CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* pp. 231-232.
- (31) *Ibidem*, p. 50.
- (32) «tenentilocum gubernatoris in villa de Alacant in parte regni Valencie consistenti...». ACA, C, reg. 690, f. 189r (1357, marzo, 25).
- (33) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 76.
- (34) *Ibidem*, pp. 80-85.
- (35) Ocho sueldos por casa, lo que, sin duda, provocaría graves daños a la villa. ACA, C, reg. 705, f. 61r (1361, febrero, 4).
- (36) ACA, C, reg. 1384, f. 46r (1362, junio, 18).
- (37) «Quodquidem mandatum eidem iusticia iuravit minime adimplere asserens vobis, ut gentivices predicto, non esse subiectum in predictis nec etiam dicta villa Aliquantis fore de Gubernacione predicta». ACA, C, reg. 705, f. 61v.
- (38) *Vid.* nota 28. TESIS i MARCA, R. *La vida del rei En Pere III*, Barcelona, 1961, p. 218.
- (39) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 236.
- (40) BELLOT, P. *op. cit.*, tomo I, p. 129.
- (41) ACA, C, reg. 1385, f. 170r (1363, octubre, 17).
- (42) «feel nostre en Johan Martinez d'Eslava, procurador de ço que'l infant don Ferrando havia ultra Sexonam et alcait de Oriola». ACA, C, reg. 1386, ff. 57r-v (1363, octubre, 17).
- (43) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 116.
- (44) ACA, C, reg. 911, ff. 20r-21v.
- (45) *Ibidem*.
- (46) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 115.
- (47) ACA, C, reg. 971, ff. 159v-160r.
- (48) *Vid.* LALINDE ABADIA, J. *op. cit.*
- (49) «.. en lo dit offici quondam predecessor vostre». ACA, C, reg. 744, f. 79v.
- (50) «Gubernatori ville Oriole». ACA, C, reg. 734, f. 20v (1366, junio, 28).
- (51) LALINDE ABADIA, J. *op. cit.* p. 49.
- (52) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* doc. 59.
- (53) *Ibidem*, doc. 81.
- (54) ACA, C, reg. 752, ff. 187r-v (1370, diciembre, 6)
- (55) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 242.
- (56) *Vid.* FERRAN SALVADOR, V. *Arnau Joan y su Stil de la Governatio*, Valencia, 1936, p. 1; TARAZONA, P. J. *Instituciones dels furs y privilegis del regne de València*, Valencia, 1580, p. 29; MATHEU SANZ, L. *op. cit.* p. 133.
- (57) ACA, C, reg. 740, ff. 148v-149r.
- (58) «Set quia percepimus quod (...) dicta castra et loca (...) non sunt infra Gubernacione Valencie set infra Gubernacione Oriole seu locorum dicti regni Valencie que sunt ultra Sexonam, quam Gubernacionem Oriole a Gubernacione predicta Valencia separavimus ob quod dictus noster gubernator Valencie mandatum nostrum complere non potuit...». ACA, C, reg. 734, ff. 132v-133r (1368, abril, 8).
- (59) «alius officialis noster in eadem praesideat». ACA, C, reg. 748, f. 76v (1370, febrero, 10).
- (60) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 436.

- (61) ACA, C, reg. 733, f. 124v (1367, agosto, 1).
- (62) FERRAN SALVADOR, V. *op. cit.*; BELLUGA, P. *Speculum Principum*, Venetiis, 1580, TARAZONA, P. J. *op. cit.*; MATHEU SANZ, L. *op. cit.*, en lo que se refiere a autores que tratan con mayor o menor profundidad la Gobernación valenciana. Como obra de conjunto *Vid.* LALINDE ABADIA, J. *op. cit.*
- (63) Acerca de este tema *Vid.* FERRER i MALLOL, M^a. T. «La tinença a costum d'Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (segle XIV)», *Miscel·lània de Textos Medievals*, 4, Barcelona, 1988, pp. 1-102.
- (64) ACA, C, reg. 971, ff. 159v-160r.
- (65) ACA, C, reg. 504, f. 82r (1328, enero, 11).
- (66) ACA, C, reg. 504, f. 93r (1328, junio, 22).
- (67) *Vid.* notas 65 y 66.
- (68) *Ibidem*.
- (69) «tamquam iudicem ordinarium partium predictarum». ACA, C, reg. 748, ff. 95v-96r.
- (70) MATHEU SANZ, L. *op. cit.* p. 143.
- (71) Matheu, que se basa fundamentalmente en el *Speculum principum* de Pere Belluga, amplía de manera notable las atribuciones del gobernador. *Ibidem*, p. 144.
- (72) *Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Aragó als regnicols del regne de València*, Valencia, 1977, rúb. XXVI, col. 1, p. 279.
- (73) *Ibidem*, rúb. XXVII, col. 2, pp. 279-280.
- (74) ACA, C, reg. 752, ff. 61v-62r.
- (75) ACA, C, reg. 752, f. 73r.
- (76) ACA, C, reg. 752, ff. 74r-v (1370, julio, 26).
- (77) ACA, C, reg. 1084, ff. 89v-90r. *Vid.* CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 170.
- (78) ACA, C, reg. 753, ff. 68r-69r.
- (79) ACA, C, reg. 1084, f. 89v (1370, noviembre, 12). *Vid.* CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* pp. 170-171.
- (80) ACA, C, reg. 748, f. 81r (1370, febrero, 12)
- (81) ACA, C, reg. 748, f. 97v (1370, marzo, 9).
- (82) ACA, C, reg. 749, ff. 51v-52r (1370, febrero, 18).
- (83) ACA, C, reg. 729, f. 55r (1366, septiembre, 28).
- (84) ACA, C, reg. 745, ff. 189v-190r (1369, noviembre, 5).
- (85) ACA, C, reg. 737, f. 46v (1367, julio, 13) y ACA, C, reg. 737, f. 47r (1367, julio, 13).
- (86) ACA, C, reg. 745, f. 49v (1369, junio, 6).
- (87) ACA, C, reg. 729, f. 44v (1366, septiembre, 22).
- (88) Pero López de Ayala, ACA, C, reg. 737, ff. 30r-v (1367, julio, 2) y Alfonso Yáñez, ACA, C, reg. 746, ff. 10r-v (1369, diciembre, 22).
- (89) *Vid.* nota 86.
- (90) ACA, C, reg. 741, ff. 12v-13r (1368, diciembre, 7).
- (91) MATHEU SANZ, L. *op. cit.* p. 144.
- (92) TARAZONA, P, J. *op. cit.* tít. VI, p. 30.
- (93) ACA, C, reg. 738, ff. 36r-v.
- (94) ACA, C, reg. 726, ff. 179r-v.
- (95) ACA, C, reg. 740, ff. 124v-125r (1368, octubre, 4).
- (96) *Vid.* nota 94.
- (97) *Vid.* nota 93.
- (98) ACA, C, reg. 745, f. 138v.
- (99) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 479.
- (100) ACA, C, reg. 741, f. 63r (1369, febrero, 6).
- (101) ACA, C, reg. 728, ff. 152r-v (1366, septiembre, 23).
- (102) Dado el número de ocasiones en que las tierras de esta Gobernación pasaron, mientras se mantuvo la contienda, de la Corona de Aragón a Castilla y viceversa, y durante cada una de ellas ambos reyes concedían a sus súbditos propiedades y rentas sobre las de

los vasallos del otro; finalizado el conflicto, Pedro IV ordenó al gobernador general del territorio que reintegrara todas las propiedades a sus legítimos dueños, lo que dio lugar a gran cantidad de actuaciones en este sentido.

- (103) ACA, C, reg. 729, ff. (40v-41r (1366, septiembre, 11).
- (104) ACA, C, reg. 735, ff. 116r-117r (1368, enero, 25); ACA, C, reg. 752, ff. 187r-v (1370, diciembre, 6).
- (105) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 491.
- (106) ACA, C, reg. 748, ff. 91r-v (1370, marzo, 9).
- (107) *Ibidem*.
- (108) AMA, Arm. 16, caja 1, n. 11 (1377, junio, 21). A pesar de que la data es posterior lo hemos señalado porque se enmarca dentro de las medidas reactivadoras de Pedro IV tras la guerra con Castilla, cuyo objetivo era conseguir un mayor desarrollo de la huerta alicantina. *Vid.* GUTIERREZ LLORET, S. «La huerta de Alicante: el alfoz urbano», en prensa.
- (109) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 501.
- (110) *Ibidem*, p. 460.
- (111) ACA, C, reg. 1388, ff. 147r-v.
- (112) FERRER i MALLOL, M^a.T. *op. cit.* p. 19.
- (113) CABEZUELO PLIEGO, J. V. *op. cit.* p. 151.
- (114) *Ibidem*, p. 465.
- (115) ACA, C, reg. 1391, ff. 9r-v (1369, diciembre, 20).
- (116) ACA, C, reg. 1391, f. 8v (1369, diciembre, 17).